

Septiembre 1º de 1948

43ª REUNION — 37ª SESION ORDINARIA

Presidencia del contraalmirante (R.) ALBERTO TEISAIRE, presidente provisional del Honorable Senado, y del doctor PABLO A. RAMELLA, presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

SENADORES PRESENTES:

AMELOTTI, Osvaldo
ANTILLE, Armando G.
AVENDAÑO, Arcadio B.
BASALDUA, Juan Carlos
BUSQUET, Alfredo
CRUZ, Luis
DURAND, Alberto
FIGUEIRAS, Demetrio
GÓMEZ DEL JUNCO, Felipe
GÓMEZ HENRÍQUEZ, Samuel
HERRERA, Julio
LAZARO, Juan Fernando de
LORENZÓN, Ricardo Octavio
LUCO, Francisco R.
RAMELLA, Pablo A.
SAADI, Vicente Leonides
SOLER, Lorenzo (h.)
SOSA LOYOLA, Gilberto
TANCO, Miguel A.
TASCHERET, Oscar
TEISAIRE, Alberto
VALLEJO, César
ZERDA, Justiniano de la

AUSENTES, EN MISION ESPECIAL:

BAVIO, Ernesto F.
MATHUS HOYOS, Alejandro
MOLINARI, Diego Luis

AUSENTE, CON LICENCIA:

MARTÍNEZ, Ramón Linidor

AUSENTE, CON AVISO:

ARRIETA, Alfredo J. L.

SUMARIO

I.—Asuntos entrados:

- I.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdos.
- II.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se reforma la organización y funcionamiento de la Sociedad Argentina de la Cruz Roja.
- III.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el convenio comercial y financiero entre las repúblicas Argentina y de Hungría, suscrito en Buenos Aires el 14 de julio de 1948.
- IV.—Mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Protocolo Adicional al Convenio Comercial y de Pagos, suscrito el 30 de octubre de 1946, entre la República Argentina y España, firmado en Buenos Aires el 9 de abril de 1948.
- V.—Mensaje del Poder Ejecutivo por el que se remiten informes sobre el plan de fomento al datilero.
- VI.—Mensajes del Poder Ejecutivo por los que se comunica la promulgación de leyes.
- VII.—Comunicaciones de la Presidencia del Honorable Senado.
- VIII.—Comunicaciones oficiales.

IX.—Comunicaciones particulares.

X.—Despachos de comisión.

- 2.—Proyecto de ley del senador Herrera sobre aplicación de la pena de amparo social.
- 3.—Proyecto de ley del senador Amelotti por el que se acuerda subsidio a la Municipalidad de Cruz del Eje, Córdoba.
- 4.—Proyecto de ley de los senadores de la Zerda y Avendaño por el que se acuerda pensión a doña María Carmen Domínguez.
- 5.—Proyecto de ley del senador Antille sobre fomento de la vivienda.
- 6.—Proyecto de ley del senador Sosa Loyola por el que se refuerza el presupuesto de la Universidad Nacional de Cuyo.
- 7.—Proyecto de ley de los senadores Ramella, Durand, Busquet y Amelotti, por el que se otorga subsidio al Hogar Don Orione (Pequeño Cotto-lengo Argentino).
- 8.—Autorización al senador Antille para integrar la delegación argentina a la III Asamblea de las Naciones Unidas, a realizarse en París.
- 9.—Licencia.
- 10.—Moción.
- 11.—Consideración del despacho de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto sobre terna para cubrir la vacante de la arquidiócesis de la ciudad de La Plata. Se aprueba.
- 12.—Consideración del despacho de la Comisión de Previsión Social en el proyecto de ley, en revisión, sobre reformas al régimen de previsión social para el personal civil de la Nación (ley 4.349). Se aprueba con modificaciones.
- 13.—Consideración del despacho de la Comisión de Previsión Social en el proyecto de ley de los senadores Figueroa y Cruz sobre modificaciones a la ley 10.650, de jubilaciones y pensiones ferroviarias. Se aprueba modificado.
- 14.—Consideración del despacho de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley, venido en revisión sobre organización de la Nación en tiempo de guerra. Se aprueba, quedando convertido en ley.
- 15.—A moción del senador Gómez del Junco se resuelve realizar sesión secreta el viernes próximo para tratar acuerdos y autorizar a la Presidencia a integrar la Comisión de Acuerdos.
- 16.—A moción del senador Teisairé se resuelve pasar a cuarto intermedio hasta la sesión de mañana.
- 17.—Apéndice.

I.—Sanciones del Honorable Senado.

II.—Comunicaciones al Poder Ejecutivo.

—En Buenos Aires, al primer día del mes de septiembre de 1948, siendo las 16 y 25, dice el

Sr. Presidente (Teisairé). — Queda abierta la sesión con la presencia de 17 señores senadores.

I

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Teisairé). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

I

Mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos. (A la Comisión de Acuerdos.)

II

Buenos Aires, 26 de agosto de 1948.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad para someter a consideración el adjunto proyecto de ley, en virtud de la cual se reforma fundamentalmente la organización y funcionamiento de la Sociedad Argentina de la Cruz Roja.

La experiencia obtenida en la aplicación de los estatutos vigentes y en el desempeño de la intervención nacional a dicha institución dispuesta por decreto 16.536 de fecha 31 de octubre de 1946, evidencian que es necesaria una reforma fundamental en su estructura con el fin de capacitarla para desempeñar con la mayor eficiencia posible la altísima misión que le incumbe tanto en el orden nacional como en el internacional.

El proyecto de ley que se remite se propone mantener su carácter de persona jurídica de derecho privado, dotándola de todos los atributos orgánicos que corresponden a dicha naturaleza, teniendo en cuenta la experiencia que surge de leyes análogas en base a las cuales puede advertirse que el Estado —en general— se ha reservado facultades de control, entre las cuales la fundamental es la de que el presidente de la institución sea designado por el gobierno de la respectiva nación.

Otras medidas de control limitado son necesarias teniendo en cuenta que la Cruz Roja actúa con fines de estrecha vinculación con el orden público y el bienestar de la colectividad, y es por ello que los recursos para obtener dichos fines emanan fundamentalmente de la contribución que en forma de subsidio u otros arbitrios análogos aportan los presupuestos del Estado.

El proyecto de ley adjunto sólo estructura el consejo directivo como organismo de gobierno supremo de la entidad; asimismo establece la existencia necesaria de los comités filiales que son los órganos locales para el ejercicio de las funciones de la Cruz Roja.

Todos los demás aspectos de organización y funcionamiento quedan confiados a la reglamentación que hará el Poder Ejecutivo, quien en base a la experiencia recogida podrá ir adecuando los detalles de

«Si el afiliado, cumplidos los treinta años de servicios y cincuenta de edad, siendo varón, o los veintisiete años de servicios y cuarenta y siete de edad, siendo mujer, no deseara jubilarse, podrá optar por continuar prestando servicios hasta cumplir los cincuenta y cinco años o cincuenta y dos de edad, respectivamente, no pudiendo durante este lapso, mientras conserve su aptitud física o intelectual para el trabajo, ser instado a peticionarla ni declarado cesante por tal motivo.» Vale decir que quedaría en igual forma que la ley 4.349.

Sr. Presidente (Ramella). — Al terminar la lectura del artículo 1º se votará esta modificación que propone el señor senador por Tucumán.

—Continúa la lectura del artículo 1º.

—Al leerse las modificaciones a los artículos 50-51, dice el

Sr. Figueiras. — Pido la palabra.

La comisión ha resuelto suprimir en este artículo la modificación de los artículos 50 y 51, considerando que la misma sólo traerá inconvenientes, por lo que deben quedar como estaban en la primitiva ley.

Sr. Presidente (Ramella). — Se va a votar el artículo 1º con las modificaciones propuestas.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Cruz. — Pido la palabra.

Deseo que se deje sin efecto el agregado de las palabras «y el excedente» que había pedido en el artículo 17, cuya redacción he estado examinando nuevamente.

Sr. Presidente (Ramella). — ¿Sería entonces una moción para reconsiderar la votación?

Sr. Cruz. — Así es, señor presidente.

Sr. Presidente (Ramella). — Se va a votar la moción de reconsideración. Se necesitan dos tercios.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Ramella). — Se va a votar la supresión de las palabras «y el excedente», en la modificación al artículo 17 de la ley 10.650 propuesta por el señor senador por Tucumán.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 2º a 7º del despacho.

—El artículo 8º es de forma.

Sr. Presidente (Ramella). — Queda aprobado.

ORGANIZACION GENERAL DE LA NACION EN TIEMPO DE GUERRA

—Se lee:

Despacho de comisión

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Defensa Nacional (Guerra, Marina y Aviación) ha considerado el proyecto de ley, venido en revisión, sobre organización general de la Nación en tiempo de guerra; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Sala de la comisión, 25 de agosto de 1948.

Alberto Teisairé. — Miguel A. Tanco. — Juan Fernando de Lázaro.

Sanclón de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación

(Agosto 12 de 1948)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Al presidente de la Nación, en su carácter de jefe supremo de la Nación, comandante en jefe de todas las fuerzas armadas y presidente del Consejo de Defensa Nacional, compete solidariamente con los ministros secretarios de Estado todo cuanto concierne a la preparación, organización y dirección de la defensa nacional.

Art. 2º — Las previsiones necesarias para la organización de la Nación en tiempo de guerra, deberán ser adoptadas desde tiempo de paz de acuerdo con las directivas fijadas por el Consejo de Defensa Nacional. La preparación y ejecución de los planes y programas destinados a satisfacer esas previsiones hasta en sus menores detalles, corresponderá a los ministerios o secretarías de Estado por intermedio de sus organismos dependientes y de aquellos que, a los efectos de la coordinación, creare especialmente el Consejo de Defensa Nacional.

Art. 3º — Al Consejo de Defensa Nacional incumbe la responsabilidad de adoptar las medidas tendientes a pasar de la organización del país en tiempo de paz a la organización para tiempo de guerra.

Para ello impartirá la orientación necesaria a todos los organismos de Estado para preparar:

- La movilización de todas las fuerzas armadas de la Nación;
- La movilización del potencial necesario para organizar la defensa civil, la seguridad interior, el funcionamiento normal de la administración y de los servicios públicos, y asegurar un ritmo de trabajo intensivo en todos los órdenes de la producción, el comercio y la industria;

Art. 4º — Los problemas fundamentales que atañen a la organización general de la Nación para la guerra, serán resueltos por el Poder Ejecutivo en acuerdo general de ministros, constituido en Consejo de Defensa Nacional.

c) La movilización y utilización para tiempo de guerra de todos los recursos morales y materiales del país;

d) La creación de los organismos necesarios para planificar, coordinar y dirigir el aprovechamiento del potencial de guerra de la Nación.

Para la resolución de asuntos especiales o de naturaleza determinada, cuya coordinación sólo requiera la intervención de algunos de los ministerios o secretarías de Estado, el presidente de la Nación, a fin de lograr una adecuada subdivisión del trabajo y una mayor celeridad en los trámites, podrá constituir, dentro del Consejo de Defensa Nacional, comisiones ministeriales o gabinetes parciales.

Las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en los acuerdos parciales de gabinete, tendrán la misma fuerza que las adoptadas en los acuerdos generales.

Art. 5º — Si en tiempo de guerra fuera necesario atender nuevas tareas o descentralizar las que actualmente atienden los ministerios existentes, el Consejo de Defensa Nacional, en acuerdo plenario, podrá ampliar el número de secretarías de Estado con categoría de ministerio. En tal caso, los decretos emanados de dichas secretarías de Estado, llevarán, además de la firma del titular, la de alguno de los ocho ministros permanentes.

El presidente de la Nación podrá crear nuevos organismos o ampliar los existentes, para poner en ejecución los planes de la movilización general del país. Asimismo, podrá encomendar funciones ejecutivas o de contralor, a los organismos asesores que colaboran con el Consejo de Defensa Nacional en la preparación, organización y dirección de los planes que integran el Plan General de la Defensa Nacional.

Art. 6º — Las funciones encomendadas al Consejo de Defensa Nacional por la presente ley y los decretos leyes 9.330/43 y 13.939/44 (ley 12.913), serán cumplidas por intermedio de la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional.

La Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, además de asesorar y estudiar los asuntos que dicho consejo le encomiende, constituye el órgano natural por intermedio del cual el presidente del Consejo de Defensa Nacional prepara e imparte a los organismos ejecutores las órdenes e instrucciones uniformes a que han de ajustarse en el cumplimiento de su cometido, y por conducto del cual se informa acerca de su cumplimiento.

Art. 7º — El Consejo de Defensa Nacional fijará, desde tiempo de paz, la misión, atribuciones y responsabilidades de cada ministerio o secretaría de Estado, en la preparación del país para la guerra, en la movilización y utilización de las personas y recursos concernientes a cada rama de la administración pública, así como de las actividades y recursos de las personas e instituciones de derecho privado que cada secretaría de Estado, en cumplimiento de sus funciones, dirige, fomenta, regula o fiscaliza.

Art. 8º — La movilización de las fuerzas armadas está regulada por las leyes y reglamentos militares. Su ejecución estará a cargo de los organismos militares correspondientes de acuerdo con la orientación

fijada para cada una de las fuerzas por el Consejo de Defensa Nacional.

Art. 9º — La movilización en los ministerios civiles será ordenada y ejecutada bajo la responsabilidad del ministro respectivo, por intermedio de las direcciones de Defensa Nacional existentes en cada secretaría de Estado.

Esta movilización se realizará de acuerdo con los planes aprobados por el Consejo de Defensa Nacional y bajo el contralor directo de la secretaría de dicho consejo.

A tal fin, la secretaría actuará como organismo asesor y coordinador entre las distintas secretarías de Estado; impartirá en nombre del Consejo de Defensa Nacional las instrucciones necesarias a las distintas direcciones de defensa; y controlará, por intermedio de los jefes militares de las correspondientes divisiones de la secretaría del consejo, el desarrollo de los planes y la ejecución de las tareas dispuestas, acerca de cuyo cumplimiento mantendrá informado al Consejo de Defensa Nacional.

Art. 10. — Para coordinar la utilización de todos los recursos del país para la guerra y para la preparación de los planes pertinentes, el Consejo de Defensa Nacional establecerá, desde tiempo de paz, el orden de preferencia para la utilización de las personas y recursos, de acuerdo con las necesidades de las fuerzas armadas y ministerios civiles.

Esta coordinación comprende, además de la utilización de las fuerzas de que dispone la Nación, los establecimientos destinados a la fabricación del material de guerra, la movilización industrial, la distribución de la mano de obra y las materias primas, y todo lo concerniente al abastecimiento general para las tropas, la población civil y las necesidades de la producción económica.

Las fuerzas aéreas tendrán prelación, entre las fuerzas armadas, para movilizar el personal que posea aptitudes o conocimientos especiales para el servicio aeronáutico.

Art. 11. — La conducción de la guerra, en su aspecto polítmilitar, compete directamente al presidente de la Nación, quien adoptará las resoluciones pertinentes en acuerdo parcial de gabinete, asistido de los secretarios de Estado en los ramos de Relaciones Exteriores, Guerra, Marina y Aeronáutica, constituidos al efecto en Gabinete de Seguridad Exterior (ó Gabinete de Guerra), con el asesoramiento directo del Estado Mayor de Coordinación.

Las tareas de coordinación que conciernen a este gabinete, cuando no requieran decisión del Poder Ejecutivo, serán adoptadas en reunión de ministros, convocada y presidida por el ministro de Relaciones Exteriores por propia iniciativa o a requerimiento de cualquiera de los ministros que lo integran.

La ejecución de las decisiones tomadas en común compete a cada uno de los ministerios dentro de su respectiva rama de gobierno.

Se organizarán además, y funcionarán bajo las mismas normas que el de Seguridad Exterior, un Gabinete de Seguridad Interior, integrado por los secretarios de Estado en las carteras de Justicia e Instrucción Pública, Obras Públicas y Salud Pública, que bajo la presidencia del ministro del Interior tendrá a su cargo la coordinación de los problemas relativos al frente interno de la Nación en guerra; y un Gabinete de Seguridad Económica integrado

por los secretarios de Estado en los departamentos de Agricultura, Comercio e Industria y Trabajo y Previsión, presidido por el ministro de Hacienda para la coordinación de los problemas de los abastecimientos, la producción, el comercio y las finanzas.

Las nuevas secretarías de Estado que pudieran crearse integrarán el gabinete a que correspondan, según la naturaleza de las funciones de gobierno que les sean asignadas.

Sin perjuicio de los gabinetes parciales que se consignan expresamente en esta ley, el Consejo de Defensa Nacional podrá constituir comisiones ministeriales especiales, para la solución de los problemas y coordinación de las actividades que interesen conjuntamente a dos o más ministerios o secretarías.

Art. 12. — El Gabinete de Seguridad Exterior, a los efectos de la preparación y conducción de la guerra y de la mayor coordinación de las fuerzas armadas en las operaciones conjuntas, será asistido en normas permanente por el Estado Mayor de Coordinación, el que le estará directamente subordinado y se integrará con jefes y oficiales de los estados mayores generales del ejército, la armada y la fuerza aérea, de acuerdo con la organización, objetivos y facultades que el Consejo de Defensa Nacional fije al reglamentar sus actividades.

El Gabinete de Seguridad Exterior y el Estado Mayor de Coordinación, sin perjuicio de los organismos propios de que dispondrá este último, contarán para la realización de sus trabajos, por intermedio del jefe de la Secretaría del Consejo de Defensa Nacional, de los subjeses militares, del conjunto de jefes y oficiales y demás organismos dependientes de dicha secretaría.

Del mismo modo los gabinetes de Seguridad Económica y Seguridad del Interior contarán para la realización de sus tareas con la colaboración de dicho personal y los respectivos subjeses de Seguridad Económica y Seguridad del Interior por intermedio del jefe de la secretaría.

Art. 13. — En caso de guerra o de su peligro inminente, el presidente de la Nación procederá a la designación del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas para la dirección integral de las operaciones, salvo que asuma personalmente el cargo.

A los efectos de la conducción de las operaciones, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas dispondrá como órgano asesor del Estado Mayor de Coordinación, el que dependerá directamente del presidente de la Nación (Gabinete de Seguridad Exterior) y será el órgano natural y obligado mediante el cual se impartirán las órdenes e instrucciones a los comandantes en jefe de todas las fuerzas.

Las operaciones terrestres serán dirigidas por el comandante en jefe del ejército de campaña; las operaciones marítimas y fluviales por el comandante de operaciones navales y las aéreas por el comandante en jefe de la fuerza aérea.

Los comandantes en jefe de las tres fuerzas dependerán, a los efectos de la dirección de las operaciones, del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, pero en la administración y gobierno de las fuerzas a sus órdenes, dependerán como siempre de los respectivos secretarios de Estado.

Art. 14. — En tiempo de guerra, el país será dividido en una o más Zonas de Operaciones y en una Zona del Interior.

Se declararán Zonas de Operaciones Terrestres las partes del territorio nacional en que deban operar los ejércitos en campaña.

Conforme a las necesidades de las operaciones navales, se declararán una o varias Zonas de Operaciones Navales en el mar, ríos, costas e islas adyacentes.

Cuando alguna parte del territorio nacional sea defendida en forma exclusiva o prevalente por las fuerzas aéreas, aquélla podrá ser declarada Zona de Operaciones Aéreas.

Las zonas de operaciones deberán ser delimitadas expresa y concretamente por decreto del Poder Ejecutivo, a propuesta de los comandantes en jefe, elevadas por intermedio del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

Será considerada zona de operaciones aéreas, sin necesidad de declaración previa del Poder Ejecutivo, el espacio aéreo que se extiende sobre los territorios y las aguas nacionales, y el espacio adyacente hasta el límite del radio de acción de las aeronaves.

Art. 15. — El Comando Superior destacado en las zonas de operaciones, ejerce la autoridad total del gobierno, tanto en lo militar como en lo civil y administrativo. Puede delegar dicha autoridad en los comandantes de ejércitos, escuadras, fuerzas aéreas o comandantes de unidades operativas independientes, respecto a las zonas en que aquéllos actúan.

Los comandantes que ejercen la autoridad total, están facultados para imponer la ley marcial dentro de las respectivas zonas de operaciones, dictando a tal efecto los bandos y disposiciones con fuerza de ley que las necesidades de la guerra impongan.

En tal virtud, tienen facultades de mando sobre las autoridades civiles que resuelvan mantener en el ejercicio de sus funciones.

Los magistrados que desempeñen funciones de justicia, y que fueren designados o confirmados en sus cargos por la autoridad militar, mantendrán independencia en su acción y la plenitud de sus atribuciones judiciales.

Art. 16. — Para los asuntos relacionados con la administración civil de la zona de operaciones, el Comando Superior de la misma tendrá adscrito un delegado civil para cada provincia, territorio nacional o parte de éstos que integre la respectiva zona de operaciones.

Los delegados civiles serán designados por el Ministerio del Interior a propuesta de los ministerios de Guerra, Marina o Secretaría de Aeronáutica según el caso.

Serán designados delegados civiles, en lo posible, los gobernadores de las provincias o territorios nacionales, cuyos territorios o parte de los mismos, quedaren comprendidos dentro de los límites de la zona de operaciones.

Los delegados civiles tendrán la función de dirigir uniformemente la administración civil en su jurisdicción y ejercer en nombre del comandante respectivo, la autoridad que a éste le compete, en lo que concierne a la administración pública y a la población civil.

Art. 17. — La Zona del Interior comprende todo el territorio del país que no haya sido declarado Zona de Operaciones y en ella las autoridades civiles nacionales, provinciales y municipales mantienen su jurisdicción y ejercitan sus atribuciones de tiempo de paz.

La Zona del Interior es única para las tres fuerzas armadas y en ella el comandante general del Interior será quien tenga a su cargo la realización coordinada de los trabajos relativos a la movilización, abastecimientos y transportes de las fuerzas armadas de acuerdo con las directivas impartidas por el Consejo de Defensa Nacional, así como aquellos relacionados con la seguridad de la Zona del Interior.

Para tales fines los organismos directivos del Comando General del Interior serán integrados por representantes de la marina y aeronáutica.

Art. 18. — Dentro de la Zona del Interior, y a los efectos de garantizar de manera especial el orden y la disciplina, el Poder Ejecutivo podrá declarar por decreto Zona de Guerra sometidas a la jurisdicción de las autoridades militares, y al régimen disciplinario de los tribunales militares, las bases navales y aéreas, los recintos portificados, los puertos, estaciones ferroviarias, las líneas de transportes, las instalaciones y líneas de telecomunicaciones, los establecimientos industriales, usinas, talleres y depósitos directamente afectados a la producción de materiales de guerra o a cubrir las necesidades de la defensa nacional, y, de manera general, todo recinto militar o militarizado, a condición de que esté perfectamente delimitado y puesto bajo custodia militar efectiva y ostensible.

Art. 19. — La adopción desde tiempo de paz, de las previsiones necesarias para la entrada en acción inmediata de todos los medios que concurren a asegurar la defensa activa del territorio contra los ataques aéreos, estará a cargo del Ministerio de Guerra (Comando General del Interior-Comando de Defensa Antiaérea del Interior) y de la Secretaría de Aeronáutica, quienes armonizarán y coordinarán la distribución y empleo de la artillería antiaérea, aviación y otros medios que se disponga para tales fines.

Art. 20. — El Ministerio de Guerra (Comando General del Interior-Comando de Defensa Antiaérea del Interior) dirige, de acuerdo con los ministerios interesados, la organización de la defensa pasiva contra el peligro aéreo y demás contingencias de la guerra (bombardeos, incendios, gases, invasión por paracaidistas, etcétera), en todo el territorio del país, con excepción de las bases y demás dependencias aéreas y navales que quedan sometidas a las previsiones adoptadas por las respectivas secretarías de Estado de Marina y Aeronáutica.

A tales fines la Defensa Antiaérea Territorial Pasiva comprende el conjunto de medidas destinadas a prevenir y entorpecer los ataques enemigos así como a reducir y reparar los estragos causados, restableciendo el orden y la normalidad en los servicios públicos, la producción industrial y demás actividades de la población.

Art. 21. — Corresponde al Consejo de Defensa Nacional establecer, desde tiempo de paz, la coordinación de las medidas y previsiones de vigilancia y defensa antiaérea activa y pasiva, territorial y naval, contra el peligro de los ataques aéreos.

Art. 22. — Es obligatoria en todo el territorio de la Nación la organización de la defensa pasiva contra ataques aéreos. Los deberes y prestaciones personales que esa organización comporta, son considerados carga pública irrenunciable, a la que están sometidos todos los habitantes del país, nacionales y extranjeros, sin distinción de sexo y según su respectiva aptitud física, de conformidad con las normas reglamentarias que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 23. — Las autoridades nacionales, provinciales y municipales están obligadas a cooperar con las autoridades militares para la organización de la defensa pasiva en el territorio de sus respectivas jurisdicciones. Son, además, las responsables del cumplimiento de las medidas y previsiones ordenadas por las reglamentaciones pertinentes para la población, las instituciones públicas y privadas y los servicios e instalaciones que están sujetos a su autoridad o control.

Art. 24. — Corresponde al Ministerio de Guerra (Comando General del Interior-Comando de Defensa Antiaérea del Interior) promover las medidas reglamentarias que deben dictar las autoridades nacionales, provinciales y municipales, a fin de que las dependencias oficiales, las entidades que administren servicios públicos y los organismos privados adopten en tiempo de paz las previsiones necesarias para disminuir la vulnerabilidad de los edificios e instalaciones. Dichas medidas impondrán, en especial en los nuevos trazados urbanos y en las nuevas construcciones, las normas de seguridad a que deberán ajustarse. En las construcciones existentes, dispondrán las transformaciones que en cada caso resulten indispensables para la seguridad de las mismas, de sus habitantes y vecinos.

Art. 25. — Las prestaciones personales para la organización de la vigilancia y defensa antiaérea territorial pasiva, así como para instrucción y preparación de los ejercicios indispensables en tiempo de paz, no podrán exceder de seis horas por mes o de tres días en el año, sin dar lugar a la indemnización correspondiente. Cuando la prestación de servicio exceda de dicho límite, el Estado compensará las horas excedentes de acuerdo al salario medio horario que perciba el convocado, determinándolo con sujeción al procedimiento señalado por los artículos 5º y 6º del decreto reglamentario de la ley 9.688, de fecha 14 de enero de 1916, el que no podrá exceder en ningún caso de dos pesos por hora.

Cuando la prestación de servicios no pueda requerirse en las horas libres y sea exigida dentro del horario habitual de trabajo, sin exceder de seis horas por mes o de tres días al año, el empleador o patrono no podrá eximirse de la obligación de abonar el sueldo o salario convenido al empleado u obrero. Si la prestación excede de dicho límite, el Estado reintegrará al empleador o patrono la indemnización correspondiente al tiempo excedido.

Art. 26. — El Poder Ejecutivo reglamentará detalladamente las condiciones bajo las cuales, en tiempo de paz, el personal afectado al Servicio de Vigilancia y Defensa Antiaérea Territorial Pasiva podrá ser convocado, utilizado y remunerado en el desempeño de sus funciones, así como indemnizado en los casos de accidentes sufridos en los actos de servicio.

Establecerá, asimismo, la organización de los servicios y centros de instrucción necesarios, otorgando las jerarquías que las necesidades del servicio impongan, haciendo efectiva la obediencia y el respeto jerárquico en todos los escalones de la misma, para lo cual, sin perjuicio de las sanciones administrativas para los funcionarios y empleados de la administración pública por el incumplimiento de sus deberes, podrá imponer sanciones penales de multa de \$ 5 a 1.000 por la primera y segunda contravención y pena de arresto de uno a treinta días a partir de la segunda reincidencia.

Decretada la movilización por causa de guerra o su peligro inminente, registrarán las disposiciones del C6-

digo de Justicia Militar para el personal convocado para el Servicio de Vigilancia y Defensa Antiaérea Territorial Pasiva como para el convocado al servicio militar.

Art. 27. — El Servicio Civil de Defensa Nacional (ley 12.913, artículos 1º y 3º), es el conjunto de obligaciones que el Estado impone a sus habitantes no movilizadas para el servicio militar a los efectos de contribuir directa o indirectamente a la preparación y sostenimiento del esfuerzo que la guerra impone a la Nación, asegurando la capacidad guerrera de las fuerzas armadas, el mantenimiento del orden interno, el funcionamiento de los servicios públicos, la producción intensiva de los materiales de guerra y los abastecimientos para el frente de batalla y el frente interior, afianzando por todos los medios la vida regular y la capacidad de resistencia de la población civil.

La movilización del servicio civil sólo podrá ser decretada por el Poder Ejecutivo cuando sea necesaria a los fines de la defensa nacional y en los casos de catástrofes o emergencias graves que afecten partes importantes del territorio nacional o de sus poblaciones.

Art. 28. — En tiempo de guerra el Servicio Civil de Defensa Nacional lo cumplen todos los habitantes del país sin distinción de sexo, a partir de los 12 años, incluso los extranjeros, como súbditos temporarios, siempre que no prefieran renunciar al derecho de asilo y ausentarse del país.

En tiempo de paz, lo cumplen los argentinos, sin distinción de sexo a partir de los 12 años, y los extranjeros voluntarios o contratados.

Excepcionalmente de la prestación del servicio civil a los extranjeros que gocen de inmunidades diplomáticas.

El Poder Ejecutivo podrá establecer en la reglamentación de la presente ley y con carácter general, las demás excepciones que considere pertinentes.

Art. 29. — La preparación, de la movilización del servicio civil estará a cargo del Consejo de Defensa Nacional, quien deberá crear desde tiempo de paz los organismos encargados de ejecutar, dirigir y fiscalizar los servicios correspondientes, así como aquellos encargados de coordinar sus actividades con las necesidades y previsiones de la movilización militar.

Sin perjuicio de otros organismos dependientes del Consejo de Defensa Nacional (Secretaría) existirán desde tiempo de paz con carácter permanente los siguientes:

Una Comisión de Zonas de Seguridad.

Una Comisión de Movilización Industrial.

Una Comisión de Movilización de la Mano de Obra.

Una Comisión de Indemnización y Subsidios a los Movilizados y sus Familiares.

Art. 30. — En caso de guerra o de su peligro inminente, o en caso de catástrofes o emergencias graves que afecten alguna zona importante del país, el Poder Ejecutivo podrá efectuar las requisiciones que sean indispensables para proveer a las necesidades de la defensa nacional.

A tales fines podrá requisar:

- a) Los servicios individuales o colectivos de todos los habitantes obligados a la prestación del Servicio Civil de Defensa Nacional;
- b) Los servicios de todos los sindicatos, sociedades y asociaciones de todo género, existentes dentro del territorio de la Nación;

- c) La propiedad y uso de todos los bienes muebles, inmuebles y semovientes existentes en el país o sus aguas territoriales, sean o no de propietarios argentinos, salvo aquellos que estén protegidos por inmunidades diplomáticas o por leyes especiales de la Nación;
- d) Las patentes de invención y licencias de explotación ya concedidas, así como cualquier invento.

Art. 31. — A los fines de la organización de la Nación para la guerra, el Poder Ejecutivo podrá proceder desde tiempo de paz, y con carácter obligatorio para todos los habitantes, al levantamiento de los censos especiales que juzgue oportuno. Los datos así recogidos no podrán ser utilizados sino a los fines exclusivos de la movilización y revestirán carácter estrictamente reservado.

Art. 32. — El Poder Ejecutivo reglamentará las formalidades y condiciones en que se realizarán las requisiciones en tiempo de guerra, conforme a las bases fijadas por la presente ley.

Toda requisición da derecho a una retribución o indemnización, equivalente al justo valor de los bienes en el momento de ser requisados.

Únicamente las autoridades especialmente facultadas por el Poder Ejecutivo podrán efectuar requisiciones, las que serán siempre documentadas con recibo firmado por dichas autoridades competentes. La fecha en que comienzan y cesan las requisiciones será fijada por decreto del Poder Ejecutivo.

El valor de las indemnizaciones será fijado administrativamente por comisiones mixtas integradas por funcionarios del Estado nacional, funcionarios locales (provinciales o municipales) y propietarios de zona, en representación de los posibles afectados, siendo sus decisiones recurribles ante la Justicia Federal tanto por los representantes del Estado como por los propietarios afectados.

Art. 33. — Durante la movilización podrán ser requisados los servicios personales de todos los habitantes obligados a prestar el servicio civil de defensa nacional, para trabajar por cuenta del Estado según su profesión u oficio, o según su aptitud física, en las tareas de la administración nacional, provincial o municipal, en los servicios públicos, o en los servicios y tareas privadas que funcionan en interés de la Nación.

Los requisados que estén sometidos a obligaciones de servicio militar definidas por las leyes de reclutamiento y sean utilizados en las tareas del servicio civil podrán ser incorporados a cuerpos especiales.

La requisición de servicios personales puede efectuarse individualmente, o bien en forma colectiva comprendiendo el conjunto de personas que forme parte de un servicio, equipo o empresa, considerado como indispensable para asegurar el buen servicio de los mismos.

Los jubilados de la administración pública y los que tengan derecho a retiro o jubilación en instituciones privadas, podrán ser reincorporados o mantenidos en los servicios que prestaban, o bien llamados a otras tareas teniendo en cuenta sus condiciones de aptitud física e intelectuales.

El sueldo, remuneración o salario de los movilizados en el servicio civil, serán fijados por la autoridad competente sobre la base del sueldo inicial del empleo ocupado, o de la función desempeñada a la cual este empleo es asimilado.

Los salarios serán fijados en base a los salarios normales y corrientes en la industria respectiva o simi-

lar, según las leyes y reglamentaciones obreras en vigor o contratos de trabajo vigentes en el lugar.

El personal destinado al servicio civil podrá recibir, desde tiempo de paz, la cédula de destino para tiempo de guerra; en ese caso deberá acusar recibo y dar cuenta de todo cambio de domicilio ulterior a la autoridad que le confirió el destino de movilización.

Cuando la comunicación de la cédula de destino hubiere sido hecha con carácter secreto por la autoridad correspondiente, la divulgación del destino asignado constituye para el autor de la divulgación el delito de violación de secreto previsto y penado por los artículos 222 y 223 del Código Penal de la Nación.

Art. 34. — Sin perjuicio de la disposición general que declara requisables todos los bienes muebles, inmuebles y semovientes existentes en el país que resulten necesarios para la defensa nacional, lo serán en especial y con prioridad para ser utilizados por las autoridades militares:

- 1º El alojamiento y acantonamiento de las tropas, el material y el ganado de las mismas;
- 2º El alojamiento y la atención de los heridos en los hospitales, sanatorios y casas particulares;
- 3º Los víveres para la alimentación de los oficiales y las tropas y el forraje para el ganado;
- 4º El vestuario y equipo para los oficiales y la tropa;
- 5º Los materiales, útiles y maquinarias destinados a las construcciones de carácter militar;
- 6º Los atalajes, el ganado, los vehículos hipomóviles y automóviles destinados a la carga y al transporte;
- 7º Los navíos, buques y demás embarcaciones que se encuentran en las costas marítimas, ríos, arroyos, lagos y canales de jurisdicción nacional cuando ellas son de matrícula argentina, incluso los servicios de sus tripulantes y personal necesario para su utilización;
- 8º Las aeronaves de matrícula nacional y el personal, instalaciones y material necesario para su utilización;
- 9º La utilización de toda la capacidad de transporte de las aeronaves que sobrevuelan el territorio de la República, cuando ellas sean de matrículas extranjeras;
10. Los servicios ferroviarios y todos los elementos y materiales de las empresas ferroviarias del país de acuerdo con los artículos 10, 20 y 21 de la ley 2.873;
11. Los servicios, instalaciones y materiales de las empresas de comunicaciones telegráficas, telefónicas y radiocomunicaciones;
12. Los puertos marítimos y fluviales, bases aéreas y aeropuertos;
13. Los recintos, locales y tinglados destinados a depósitos de materias primas y productos de la agricultura, ganadería e industria de elaboración.

Art. 35. — La requisición de efectos materiales y de establecimientos industriales, puede ser efectuada a título de dominio o a título de uso.

La requisición a título de dominio consiste en la incautación definitiva de plantas industriales, fábricas, talleres, equipos, etcétera, para ser utilizados por el Estado por cuenta propia y como dueño, correspondiendo en consecuencia la indemnización por compra.

La requisición a título de uso es la inenutación temporaria de los referidos establecimientos. Puede ser total o parcial, según que afecte a todo el establecimiento o sólo a una parte; por un período determinado de tiempo o sólo por algunas horas diarias; por uno o más turnos de trabajo compartiendo la capacidad de producción con el propietario o empresa particular. En estos casos, corresponde abonar la indemnización en relación al uso que el Estado hace de dichos establecimientos.

También podrá el Estado incautarse de la capacidad productiva, total o parcial, de las fábricas, talleres, etcétera, sin tomar posesión de las mismas. En este caso, seguirán en manos de las empresas o propietarios particulares, pero con la obligación de trabajar por cuenta del Estado y a órdenes de las autoridades militares o civiles que se designen con todos sus medios, e incluso con todo su personal, ya sea en forma permanente, ya sea por horas o por turnos de trabajo.

El hecho de que el establecimiento industrial se mantenga en posesión de la empresa o propietario particular, no impide el contralor de fabricación ni la vigilancia y custodia militar del establecimiento.

El personal de los establecimientos industriales requeridos a título de dominio o a título de uso, o el que trabaje a órdenes del Estado en las fábricas militares y servicios públicos, estará sometido al régimen disciplinario que esta ley dispone para los movilizados en el Servicio Civil de Defensa, mientras el Poder Ejecutivo en la Zona del Interior, y la autoridad militar en las zonas de operaciones, no dispongan someter a dicho personal a la jurisdicción de tiempo de guerra, conforme a lo establecido por el artículo 119, inciso 1º, del Código de Justicia Militar, o declare «zona de guerra» al recinto o lugar en que funciona la planta industrial, fábrica, taller, etcétera.

Art. 36. — El Poder Ejecutivo reglamentará el cumplimiento de la presente ley en cada uno de sus aspectos, pudiendo disponer contra las personas que en tiempo de paz no cumplan con las obligaciones establecidas en la misma, sanciones consistentes en multa de \$ 5 a \$ 1.000, por la primera y segunda contravención, pena de arresto de uno a treinta días a partir de la segunda reincidencia, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y administrativas que corresponda aplicar a los funcionarios o empleados de la administración pública por el incumplimiento de sus deberes.

Decretada la movilización por causa de guerra o su peligro inminente, o en caso de catástrofes o emergencias graves que afecten zonas importantes del país, el personal convocado para el Servicio Civil de Defensa quedará sometido a las disposiciones del Código de Justicia Militar, en la misma forma que el convocado para el servicio militar. Deberá considerarse como causa especial de atenuación de las penas a aplicarse a los movilizados en el servicio civil la circunstancia de pertenecer al sexo femenino o ser menor de 18 años o mayor de 60 para los convocados varones.

Art. 37. — El Poder Ejecutivo podrá disponer, sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, un régimen penal y disciplinario especial en tiempo de guerra para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la presente ley, especialmente en lo que concierne a la movilización del Servicio Civil de Defensa, censos y requisiciones, movilización industrial y mano de obra, reprimiendo la no presentación, la demora y el abandono del servi-

cio, la desobediencia, las faltas de respeto y las violencias o amenazas contra los superiores en la jerarquía técnica o administrativa, o contra las autoridades militares destacadas en los establecimientos industriales y demás organismos administrativos del servicio civil para la dirección, vigilancia o custodia de los mismos, o para el mantenimiento de la disciplina y el orden en el trabajo, así como sancionar todo abuso de autoridad contra los inferiores o la población civil, todo exceso o contravención en materia de requisiciones de servicios personales o recursos materiales, a condición de que las penas así dispuestas sean menos graves que las previstas por el Código de Justicia Militar para la represión de los mismos delitos.

El Poder Ejecutivo podrá igualmente disponer mientras lo crea oportuno que los movilizados en el Servicio Civil de Defensa sean juzgados aun en tiempo de guerra por los tribunales de la jurisdicción ordinaria de tiempo de paz y no por los tribunales de la justicia militar respecto a la aplicación de las sanciones establecidas en virtud de la presente ley.

Art. 38. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Ramella). — En consideración.

Sr. Telsaire. — Pido la palabra.

Se va a considerar, señor presidente, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso y aprobado ya por la Cámara de Diputados de la Nación.

Es posible que un proyecto de esta naturaleza sea campo propicio para que los imaginativos den vuelo a su fantasía. Pero todas las especulaciones al respecto, pierden su valor tan pronto se piensa que para nuestro pueblo, la guerra no es en ningún caso, un hecho deseado ni sería la consecuencia de un acto voluntario, sino una imposición producto de circunstancias ajenas a nuestra propia voluntad. Es por ello que este proyecto de ley es de carácter preventivo. No es apresto bélico para desatar una guerra; es sólo una medida elemental de seguridad. Es uno de los tantos pasos orgánicos que un gobierno progresista como el nuestro debe dar, a fin de encauzar acciones, hoy dispersas, en una corriente única, que en el fondo significa resolver un problema fundamental ahorrando tiempo, energías y dinero.

La experiencia enseña que la improvisación en estos asuntos, da lugar más tarde a soluciones de emergencia, que deben evitarse, por ser ellas tardías, inadecuadas e inconvenientes como que son el resultado de la improvisación, del desorden y de la falta de organización.

Lord Maurice Hankey, secretario del consejo imperial del gabinete inglés, en su obra *Control gubernativo de guerra*, se queja de que Inglaterra, en el año 1939, estuviera en inferiores condiciones al año 1914 por falta de legislación adecuada.

El general Eisenhower, en marzo de 1948, al entrar en discusión en el parlamento la ley de defensa nacional, se expresó diciendo que la legislación, para ser aplicada en caso de emer-

gencia, es el primer paso esencial dentro de la esfera política de seguridad. «A ese respecto, —agrega el general Eisenhower— muchos de los norteamericanos objetaron que una legislación para una movilización total puede conducir a un régimen de fuerza en época de paz.» «Estos temores son infundados —continúa el referido general— ya que el peligro de la legislación en nuestra forma de vida, puede surgir de la tendencia a aprobar en forma de oleadas, las histéricas medidas rápidamente improvisadas, para hacer frente a una crisis.»

Durante la paz, todos los parlamentos se resisten a legislar con respecto a la guerra, temiendo que al adoptar previsiones para la defensa nacional, se marche hacia la guerra, cuando en realidad, lo que se busca es evitar malas soluciones a última hora.

El proyecto que se considera es indispensable a la seguridad de la Nación, facilitando a las fuerzas armadas la coordinación indispensable e imprescindible. Organizar una nación para la guerra, es una necesidad, es resolver un problema que exige largos y pacientes estudios de cuyos resultados depende nuestra existencia, en el caso desgraciado de un conflicto armado.

El proyecto en cuestión, tiene antecedentes numerosos y autorizados. Medidas similares han sido tomadas desde hace años en la totalidad de los países que se consideran, por lo menos, medianamente organizados.

No podría ser de otra manera, si se tiene en cuenta que desde las primeras luchas humanas hasta nuestros días, las formas de la guerra se han modificado constantemente hasta llegar a tener hondas repercusiones sobre todos los aspectos de la vida política, económica y social de un país.

La guerra moderna es infinitamente variada en sus aspectos, en su ritmo y en los medios que su desarrollo exige. Las fuerzas armadas no constituyen sino una parte de la defensa nacional. La defensa nacional es un deber ciudadano, sin distinción de sexo, profesión o actividad, deber que no surge de la guerra misma, sino que la precede y la sobrevive, teniendo por ello carácter permanente. El deber de la defensa, que sólo alcanzaba en el pasado a los hombres incorporados a las fuerzas armadas, se ha transformado hoy en el deber de la defensa nacional, en el que cada habitante debe tener su puesto señalado para servir a la defensa de la nación. El poder ya no se tasa como en el pasado, principalmente por el número y calidad de los habitantes, sino también por los medios, entrando para ello en juego la capacidad industrial, la materia prima, el combustible, la energía, los elementos, las armas, las municiones, el transporte, etcétera.

Las guerras en nuestros días son guerras totales, en las que se combate simultáneamente y

con igual intensidad sobre seis frentes bien distintos, aunque íntimamente relacionados y dependientes entre sí, ya sea estratégica o tácticamente. Dichos frentes son: el político, el económico, el terrestre, el marítimo, el aéreo y el frente interior. De allí que, aunque cualquier nación puede iniciar una guerra, su capacidad para sostenerla con eficacia estará supeditada a las fuerzas y medios de que disponga en cada uno de los frentes antes nombrados. La cooperación entre sí y la resistencia que puedan oponer a los eventuales enemigos, son factores de extraordinaria importancia que el Estado debe prever y organizar, realizando su planificación al detalle.

Este proyecto resuelve el problema, pues contiene las disposiciones básicas mínimas en forma prudente, limitando facultades, pero contemplando la entrada en acción inmediata de todos los medios sobre bases generales.

Al votar el Honorable Senado este proyecto tal como viene de la Cámara de Diputados y convertirlo en ley, habrá contribuido a dar un paso orgánico y de gran importancia.

Sr. Presidente (Ramella). — Se va a votar en general el despacho de la comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Ramella). — En consideración en particular.

Sr. Teisaire. — Hago indicación en el sentido de que se enuncie solamente el número de los artículos.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Ramella). — Así se hará, entendiéndose que los artículos que no sean objetados, se darán por aprobados.

—Sin observación, se aprueba el despacho en particular.

Sr. Presidente (Ramella). — Queda convertido en ley.

15

MOCION

Sr. Gómez del Junco. — Dado que han llegado algunos pedidos de acuerdos, solicito que se realice sesión secreta el día viernes próximo. Al mismo tiempo mociono en el sentido de que la Comisión de Acuerdos sea integrada, por encontrarse ausente del país el señor senador por Salta doctor Bavio, y se faculte a la Presidencia para efectuar esa designación.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Ramella). — En consideración la moción formulada por el señor senador por Córdoba.

—Se vota y resulta afirmativa.

16

CUARTO INTERMEDIO

Sr. Teisaire. — Pido la palabra.

Hago moción para que el Honorable Senado pase a cuarto intermedio hasta la sesión de mañana.

—Apoyado.

Sr. Presidente (Ramella). — Se va a votar la moción formulada por el señor senador por la Capital.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Ramella). — Invito a los señores senadores a pasar a cuarto intermedio hasta la sesión de mañana.

—Eran las 20 y 5.

CARLOS E. MALLADA.
Subdirector del Cuerpo de Taquígrafos.